

CRONICA DEL MES. JULIO Y AGOSTO

Durante el mes de julio, más que en ningún otro, los destinos de El Salvador y del área se han ventilado fuera de sus fronteras, como para mostrar dónde se decide el futuro de la región. Los clarines del diálogo eran ahogados por los tambores de la guerra; como en el tiro de pichón, a cada paloma mensajera de paz y diálogo que lograba escapar de su jaula y remontar el vuelo, le estaba aguardando el tirador certero que le disparaba su carga de perdigones.

El presidente de Costa Rica logró concertar una reunión entre el embajador especial para la región, Richard Stone, y cuatro delegados del FDR-FMLN, pero la reunión no logró tenerse "por discrepancias en el procedimiento", si bien ambas partes se manifestaron abiertas a un futuro diálogo; parece ser que la publicidad dada, el lugar escogido y la ausencia de testigos imparciales, no fueron aceptables a los representantes de los frentes salvadoreños.

Los días 16 y 17 se reunieron en Cancún los cuatro presidentes del grupo de Contadora, y emitieron un extenso comunicado propiciador de la paz en la región, al mismo tiempo que dirigieron una carta a los presidentes de Cuba y de los Estados Unidos, excitándolos a colaborar en la búsqueda de la paz. Castro contestó el día 21 de julio, haciendo concesiones significativas en ese camino. Reagan respondió el día 26, expresando un apoyo formal, alegando el nombramiento de Stone y de la comisión bipartidista encabezada por Kissinger, y ofreciendo sus oraciones y las de sus colegas para el éxito de su trabajo.

Daniel Ortega, coordinador de la junta de reconstrucción nacional de Nicaragua, en el discurso conmemorativo del cuarto aniversario del

triunfo de la revolución, en la ciudad de León, avanzó la postura de su país e hizo importantes concesiones, como el planteamiento multilateral de la crisis, la oferta de un tratado de paz con Honduras y el corte del suministro de armas a El Salvador de parte de cualquier país, entre otras cosas. Reagan, por su parte, en vísperas de dicho aniversario, lanzó graves acusaciones y amenazas al gobierno sandinista, envió una escuadra de guerra a las costas del Pacífico cercanas a Nicaragua, otra aún mayor a las costas del Caribe (bajo la excusa de que barcos soviéticos llevaban armas a Nicaragua, pero luego se comprobó eran buques mercantes con diversos productos y apenas escaso armamento de transporte o defensivo), y anunció el inicio de ejercicios militares durante seis meses en la zona hondureña cercana a la frontera nicaragüense, con la participación de más de 4.000 soldados norteamericanos.

A pesar de que en el presente semestre el número de muertos y capturados ha sido considerablemente superior al anterior; a pesar de que la reforma agraria, el juicio a los asesinos de ciudadanos norteamericanos, el progreso democrático y el diálogo con la guerrilla están congelados, la administración Reagan certificó, por medio del Secretario de Estado, George Schultz, que los progresos logrados en El Salvador son suficientes para continuar con la ayuda militar y económica, aunque reconociendo que los niveles alcanzados en el respeto a los derechos humanos todavía no son aceptables. Por su parte, el Congreso aprobó el último proyecto del Plan para la Cuenca del Caribe, y la AID solicitó la aprobación de tres millones y medio de dólares para posibilitar las elecciones en El Salvador. Reagan, en fin, nombró la comisión bipartidista pedida por el

Congreso para elaborar una política congruente para el área, comisión que incluyó a prominentes personajes de la política norteamericana y de los negocios y entidades culturales y sociales, encabezada por Henry Kissinger, quien anunció que hasta inicios del año próximo no tendrían un proyecto elaborado.

A finales del mes se volvieron a reunir los cancilleres del grupo de Contadora con sus homólogos de la zona, sin mayores acuerdos, fuera de un apoyo formal al grupo y a la reunión de Cancún, pues llevaban posiciones tomadas previamente en la reunión de los cancilleres de Guatemala, El Salvador, Honduras y Costa Rica, con un plan de ocho puntos para la pacificación.

El último día del mes el presidente de Colombia logró sentar a la mesa de conversaciones, durante dos horas en el propio palacio presidencial y con su presencia inicial, a R. Stone y Rubén Zamora (delegado por el FDR-FMLN, a quien el gobierno colombiano asignó edecanes y le dio trato oficial). Fue un primer contacto, para el que Stone logró la anuencia de las fuerzas políticas salvadoreñas renuentes u opuestas. No trascendió lo tratado por común acuerdo de las partes, y se anunció la celebración de futuras conversaciones. Stone regresó inmediatamente a San Salvador para dar cuenta de lo tratado y volar una hora después a Bogotá. Por otro lado, el FDR-FMLN también ofreció diálogo a la Comisión de Paz nombrada por el gobierno salvadoreño, aunque todavía no se haya cristalizado.

Por otro lado, la reunión de la Internacional Socialista en Madrid, así como las visitas de cancilleres centroamericanos a Felipe González, la reunión de altos mandatarios americanos en Caracas con ocasión de la celebración del bicentenario de Simón Bolívar, dieron un espaldarazo a los esfuerzos del grupo de contadora. Sin embargo, Estados Unidos mantiene sus flotas en Centroamérica, continúa adiestrando soldados salvadoreños en Honduras, ya no se avergüenza de apoyar a los antisandinistas a quienes califica como de "luchadores de la libertad", sigue adelante con las mayores operaciones militares jamás realizadas en la zona, y el presidente cada semana pronuncia un discurso o mantiene una rueda de prensa en que lanza sus invectivas contra Nicaragua y Cuba, a pesar de la preocupación y cierta oposición en el Congreso, a pesar de las críticas en los principales medios de comunicación o de los grupos sociales de mayor sensibilidad.

Mientras tanto, los actores secundarios del drama centroamericano interpretaron su papel con mayor o menor fortuna. El canciller hondureño, Paz Barnica, en su gira por Europa mantuvo sin rubor que su país buscaba paz; pero su presidente, Suazo Córdova, visitó la frontera para elevar la moral de sus tropas en caso de guerra; la amenaza y temor de un conflicto han motivado que el doble del número normal de gente se vaya del país y se lleve sus ahorros y pertenencias. El jefe de la guardia de Panamá, general Paredes, en su visita a Costa Rica se atrevió a hacer declaraciones contra Nicaragua y Cuba, lo que originó conflictos a la cancillería encargada de la política exterior. Edén Pastora declaró que se retiraba de la guerra por falta de apoyo militar, pero a los pocos días volvió a internarse en la montaña sur reabastecido. Nicaragua se ve cada día más acosada por las invasiones armadas con base en Honduras y su economía va mostrando las consecuencias de la guerra.

Por lo que respecta a la vida interna de El Salvador, el mes se inició con el informe del Presidente Magaña ante la asamblea, en el cual repitió los progresos logrados en todos los aspectos de la vida nacional, política y económica durante su año de gobierno, las comisiones creadas y la negativa a compartir el poder con el FDR-FMLN si no es a través de las elecciones. Pero las elecciones y su realización continúan siendo punto de discusión para las diferentes fuerzas políticas y para la concreción de las mismas, dada la premura unida a la escasez de recursos. El proyecto de Constitución ya fue remitido al pleno, aunque incompleto por falta de acuerdo en algunos puntos, y se abrió la ronda de exposiciones de distintas fuerzas sociales y políticas que solicitaron exponer sus puntos de vista ante el pleno. Al mismo tiempo, la Asamblea renovó por otro mes rutinariamente el estado de sitio. Mons. Rivera, en su homilía dominical, abogó por el diálogo y puso las condiciones indispensables, como la sinceridad y apertura. En fin, el embajador Hinton se despidió con un discurso ante la Cámara Americana de Comercio, en el que después de exponer los objetivos y los logros de su gestión, mostró su frustración por la falta de justicia en los asesinatos de norteamericanos y afirmó que la injusticia social, las deficiencias estructurales, la herencia de 50 años de regímenes autocráticos y represivos, así como la tradición de unas fuerzas armadas situadas, en la práctica, por encima de la ley, no se podían superar en corto plazo; terminó mostrando su extrañeza de que las fuerzas vivas

del sector privado guardarán silencio ante las matanzas de los escuadrones de la muerte, por miedo a denunciarlo públicamente.

La crisis económica, ya endémica, se refleja cada mes en algún rubro distinto. En julio afloró el problema de la leche en polvo. Se ha terminado la leche íntegra, por falta de divisas, y la que viene, por donación, es mala leche, escasa, y no sirve como alimento básico para los niños. La AID ha incrementado la ayuda de alimentos, pero muchos de ellos escasean. En fin, las divisas que vienen al país, por distintos caminos, tienen un destino que no acaba de aclararse y todos se quejan de su falta, por lo que la devaluación del colón, la real, se mantiene a niveles de casi cinco por dólar en el mercado negro y de prácticamente cuatro en el paralelo oficial.

Mientras tanto, la guerra, esa plaga que se extiende por todo el territorio, sin antídoto eficaz, continúa dejando su rastro de desolación y muerte. Durante el mes de julio el FMLN informó de 83 acciones armadas (14 de ellas en el departamento de Cuscatlán, 11 en el de Santa Ana, 9 en el de San Salvador, 7 en el de San Miguel); de ellas, 9 fueron de sabotaje (la mayoría a la energía eléctrica y un tren descarrilado y dinamitado), 9 tomas, 53 acciones estrictamente militares (2 de ellas de ajusticiamiento), y otras 12 de distinta índole. A consecuencia de esas acciones la F.A. tuvo 60 muertos (3 subtenientes, 2 sargentos, 1 cabo y 54 soldados), pero si se toman en cuenta también los demás grupos paramilitares de apoyo, llegarían a 76 muertos, 107 heridos y 93 bajas, para un total de 273 "bajas". Al mismo tiempo recuperaron 91 armas largas, 6 cortas y 4 de apoyo. Se tomaron el puesto fronterizo de El Poy (Chalatenango) y las poblaciones de Nueva Granada (Usulután), San Gerardo (San Miguel) y un barrio de Suchitoto (Cuscatlán).

Sin embargo, en el mes de julio la F.A. mantuvo cierta iniciativa y realizó varios e importantes operativos. Continuó con el de "bienestar para San Vicente", en donde sufrió 12 bajas y causó la muerte a 2 miembros del FMLN y a 6 de sus colaboradores. Además, inició un operativo en el departamento de Usulután, para llevar a cabo el plan CONARA, movilizándolo a 4.000 efectivos durante 15 días, en el que dijo haber causado 120 bajas al FMLN, cosa que éste negó. En Chalatenango también montó el día 3 un operativo, que le llevó a recuperar la carretera Troncal del Norte, tras el ataque a El Poy, matando en Tejutla a 6 civiles; en el operativo habría causado

30 bajas al FMLN y habría sufrido 5 la F.A. En el departamento de San Miguel, otro operativo con 2.000 efectivos durante 4 días, iniciado el día 15, habría causado 50 bajas a la guerrilla, según la F.A., y sufriría 28 bajas en sus filas, según el FMLN. En Morazán se inició el día 16 un gran operativo, sin mayores informes en el mes. En Cuscatlán, a partir del día 15, la F.A. patrulló el departamento en grupos de 45 militares; el FMLN afirmó que le habían causado 125 bajas a la F.A., pero ésta sólo admitió 11 muertos en sus filas y 38 heridos, mientras dijo haber causado 100 bajas al FMLN. Por último, en San Marcos (San Salvador) cayó una célula de las FARN.

En cuanto a la población civil, durante el mes de julio murieron como víctimas de la violencia 424 personas a manos del ejército, grupos paramilitares y escuadrones (196 en enfrentamientos, 140 en operativos militares), contra 8 muertes atribuibles a la guerrilla; asimismo, fueron capturadas 78 personas, de las que 2 aparecieron asesinadas, 57 se dieron por "desaparecidas" y el resto fueron confinadas a cárceles o al cuartel de la Policía Nacional; el FMLN, a su vez, capturó a 4 agentes de cuerpos de seguridad, sin dar a conocer su paradero.

Al despedirse de El Salvador el coronel John Waghelstein, jefe de los asesores militares, expresó los avances técnicos de la F.A., su mejora en entrenamiento, en seguir las tácticas propuestas por los norteamericanos, con lo que piensa que la guerra será ganada en dos años, si se mantiene la ayuda de su país y el incremento en oficiales y tropa. En respuesta, el Ministro de Defensa, Vides Casanova, indicó las dificultades al interior de la F.A. para adaptarse a la nueva estrategia, la obligación de la vigilancia y patrullaje constantes por tierra, mar y aire en todo el territorio, y la necesidad de que cambien los que todavía no estén de acuerdo con esto, para salvar la institución. Un supuesto movimiento de oficiales de bajo rango, titulado "azul y blanco" emitió un segundo comunicado protestando contra la injerencia norteamericana y apoyando la proclama del 15 de octubre y sus principios. Mientras tanto, nuevos reclutas ingresaron a los cuarteles y a la Escuela Militar, para ascender a 875 los aspirantes a cadetes en el primer semestre del año. En Morazán fueron juramentados 360 integrantes del batallón Lenca, y los primeros 60 miembros del batallón Arce partieron para Honduras a recibir su entrenamiento.

A los cuatro días del asesinato del diputado

de ARENA, Barrios Amaya, el Ejército Secreto Anticomunista (ESA) dejó dos cadáveres en el parqueo del hotel Siesta, con una amenaza a todos los integrantes y simpatizantes del FDR-FMLN. Ante esto, el COPREFA condenó el hecho y dijo que había leyes y tribunales para hacer justicia. D'Aubuisson también se apresuró a negar cualquier vinculación de su partido con ESA, pero advirtió que la Policía Nacional le había informado de un plan terrorista para asesinar a dirigentes políticos, por lo que exigía se diera completa información y que la ciudadanía se debía organizar para la defensa zonal y para dar aviso a los cuerpos de seguridad sobre cualquier cosa o persona sospechosa. Por otro lado, la asamblea decidió prorrogar por otro mes la ley de Amnistía (hasta el 16 de agosto), pero aplicable únicamente a los alzados en armas que se entregaran.

El mes de julio, en conclusión, deja percibir la aproximación de una gran tormenta tropical, que no es de lluvias benéficas, sino un verdadero ciclón que amenaza arrasarse con gran parte del área centroamericana. La ingente militarización y concentración de tropas en Honduras, las flotas navales en el Pacífico y en el Caribe, más los violentos discursos y amenazas del Pentágono y la Casa Blanca, parecen converger hacia un encuentro catastrófico en Nicaragua y El Salvador, que los escasos claros de firmamento y los vientos que soplan desde Contadora difícilmente se prevé puedan disipar la tormenta.

Como ya es tradicional, el foco principal de atención durante el mes de agosto está centrado en el campo internacional, donde el gobierno de EE.UU. va atando todos los cabos para su política de control de la región.

El día 9 de agosto se produjo en Guatemala un golpe militar, prácticamente incruento, encabezado por el ministro de defensa, general Oscar Mejía Victores, y en la proclama justificativa se alude, como una de las razones, al abuso religioso que el anterior presidente, Ríos Montt, y otros altos funcionarios hacían de sus puestos para beneficios personales en contra del sentimiento católico mayoritario del pueblo y de la separación Iglesia-Estado. Por las sucesivas declaraciones se pudo apreciar inmediatamente la postura política de los detentadores del nuevo régi-

men, en contra del marxismo y de la subversión, en contra de Nicaragua, Cuba e incluso del "grupo de Contadora" —tesis que luego fue suavizada—, su alineamiento más estrecho con EE.UU. y su política para la región, lo que produjo de inmediato la agilización de mayor ayuda económica y militar, y una simpatía fuerte hacia la reestructuración del CONDECA. Al mismo tiempo, se prometió continuar con el proceso democrático y con la programación de las elecciones del régimen anterior, pero también con el mantenimiento del impuesto sobre el valor agregado (IVA). La víspera del golpe se reunieron en el portaaviones norteamericano anclado en aguas del Pacífico centroamericano los ministros de defensa de Guatemala (Mejía Victores), de Honduras y de El Salvador; el propio día del golpe, y mientras éste se estaba produciendo, el agregado militar norteamericano en Guatemala llegó al Palacio Nacional, se enteró de la situación y regresó a su embajada para informar; pero, por supuesto, como lo declarara oficialmente, Estados Unidos no tuvo nada que ver en el golpe.

Mientras se mantiene la flota norteamericana en aguas del Pacífico, cambiando el buque enseña **Ranger** por el acorazado **New Jersey** sus acompañantes, en el Caribe se instalaron el portaaviones **Coral Sea** y su séquito de buques, para apoyar las maniobras honduro-norteamericanas; al tiempo que Honduras se constituyó en un verdadero baluarte norteamericano, donde se construyen campos de entrenamiento y fortificaciones, se amplían pistas aéreas y puertos, se abastece copiosamente de todo tipo de armamento sofisticado, incluidos helicópteros y aviones militares, equipos de comunicaciones, se eleva la ayuda en los distintos rubros a casi 300 millones de dólares, y se convierte la embajada norteamericana en el país en una de clase II, con 110 funcionarios diplomáticos a tiempo completo, 247 voluntarios del Cuerpo de Paz, más de 200 asesores militares —sin contar con los implicados en las maniobras "Pino Grande II"—, y 100 miembros de AID entre norteamericanos y hondureños. Mientras tanto, en El Salvador se anunció la reapertura de la embajada israelí y el incremento de la ayuda militar y del entrenamiento de la F.A. salvadoreña por asesores de ese país, especialmente para los cuerpos de seguridad, a los que EE.UU. no puede ayudar directamente por cuestiones legislativas. Por otro lado, el Pentágono negó que miembros del ISA (Actividad de Apoyo de Inteligencia), contra lo que afirman los

comités de inteligencia del Congreso, estén implicados en actividades encubiertas en Centroamérica. En fin, la reunión de los Presidentes Reagan y La Madrid, evidenció, una vez más, la profunda divergencia entre la postura mediadora del mexicano y la belicista de su colega de EE.UU.

Sin embargo, la preocupación por el conflicto en el área y por la búsqueda de soluciones humanas y racionales también tuvo sus defensores internacionales. El presidente panameño protestó por el uso de la zona del canal para los vuelos de espionaje sobre la región y pidió a Reagan que retirara sus tropas de Honduras y de los mares adyacentes. El presidente de Costa Rica también escribió una carta a Kissinger mostrándole su neutralidad y su voluntad de no verse involucrado en el conflicto militar. Varios senadores norteamericanos —Cranston y Specter, principalmente— enviaron cartas a su presidente pidiendo fomentar la solución política del “grupo de Contadora”, así como las propuestas de diálogo del gobierno sandinista, y retirar las tropas y navíos de guerra del área. Pero fueron las máximas instancias religiosas las que se pronunciaron en este mes en forma más clara y decidida. El Consejo Mundial de Iglesias, reunido en Canadá, sostuvo que las causas verdaderas de la crisis centroamericana son las de la injusticia social mantenida por mucho tiempo, y se pronunció por la solución política y contra la presencia militar norteamericana, así como por un nuevo orden económico mundial; los obispos de Centroamérica, reunidos en Costa Rica, también llegaron a la conclusión de que la causa verdadera es la injusticia social, y abogaron por el diálogo como solución contra la violencia; el obispo Brufau, de San Pedro Sula, se pronunció en contra de las bases militares norteamericanas en Honduras e insistió en el diálogo como solución; en fin, aunque en otro aspecto, los obispos hondureños también denunciaron la hambruna que predomina en el sur de su país y la acción inmoral de los “coyotes” que se aprovechan de las circunstancias para hacer fortuna.

Como consecuencia de las presiones internas y externas, y para dar la impresión de apertura a soluciones políticas, o para tomarlas en cuenta sinceramente en sus planteamientos globales, la administración Reagan dio un paso más en las conversaciones con el FDR-FMLN. El día 30 de agosto, después de haberse reunido durante varias horas con el Presidente Magaña, Richard

Stone voló a Costa Rica donde se sentó junto con altos representantes del Consejo de Seguridad y del Departamento de Estado, por mediación del presidente Monge, presente en las conversaciones, con los representantes del FDR-FMLN Ungo, Zamora, Aguiñada y López. Las reacciones e impresiones se hicieron públicas ya en los primeros días de septiembre, no así el contenido de la reunión, que se ha mantenido en secreto por acuerdo de ambas partes. Sin embargo, como dijo Ungo a la salida de la reunión, ya era un paso positivo el haberse sentado a hablar y el hecho de que el gobierno norteamericano los hubiera reconocido como interlocutores válidos. Asimismo, en esos días se reunieron también en Bogotá, bajo los auspicios del presidente Betancour, los representantes de la Comisión de Paz salvadoreña, Quiñónez y Mons. Revelo, y los representantes del FDR-FMLN, Bonilla y Molina, a los que se sumaron después Stone y Aguiñada. Aunque tampoco se dio a conocer lo tratado, esta reunión, de personajes secundarios por ambas partes, se convirtió en la apertura de otra posible puerta para un arreglo negociado, si es que así lo decide EE.UU.

Por lo que se refiere a la vida política nacional, resaltan dos aspectos de índole distinta: los informes de labores de varios ministros ante la asamblea y las discusiones en torno a la Constitución y a las elecciones. El ministro de defensa reconoció que en el año comprendido entre julio de 1982 y junio de 1983 se ha incrementado la F.A. en un 21.2%, han ascendido 87 jefes y 226 oficiales, se han realizado 99 cursos de capacitación (70 de ellos en el extranjero), se han impuesto sanciones a un oficial y 201 elementos de tropa, se han dado casi 50 millones de colones en prestaciones y beneficios, y ha habido 6.487 bajas (2.292 muertos y 4.195 heridos), además de 328 desaparecidos. Días más tarde rectificó diciendo que las bajas eran de todo el tiempo que va de guerra, pero otros datos y cifras parecen constatar que la primera versión era la correcta y que la sinceridad de la confesión había causado malestar o preocupación en determinados círculos.

El ministro de planificación lamentó la situación nacional catastrófica, en la que sólo los daños causados por la violencia ascienden a 1.492 millones de colones. El de hacienda señaló que la deuda interna y externa se eleva a 3.882 millones de colones; el subsecretario de economía declaró que mientras las exportaciones

alcanzaron la cifra de 1,845 millones de colones, las importaciones se elevaron a 2.250 millones, y que los 502.6 millones que se recibieron del exterior ayudaron a equilibrar la economía nacional, pero que en lo que respecta a las finanzas públicas, en 1982 se continuó manifestando el deterioro. También el ministro de justicia deploró el deterioro del orden jurídico en todas sus unidades, así como la escasez de recursos económicos y humanos. Los titulares de educación, por su parte, lamentaron que ese ramo tendrá en el presente año un déficit de 42 millones de colones, lo que incidirá en servicios médico-hospitalarios del magisterio así como en pagos de contratos y horas-clase. El presidente del Banco Central, en fin, presentó una visión optimista de la situación económica y financiera del país, contra lo que sostuvo el informe anual del BID, que muestra un deterioro progresivo —aunque menor que en años anteriores— en todos los indicadores económicos del país.

A mediados del mes de agosto se iniciaron los debates en el pleno de la asamblea, para la aprobación de la nueva constitución, una vez oídas todas las mociones de distintas asociaciones e instituciones. Desde su inicio se pudo apreciar que, en primer lugar, la mayor parte de los grupos políticos no mostraban urgencia alguna por una pronta aprobación de la Carta Magna, fuera de la DC que está interesada en tener elecciones cuanto antes; en segundo lugar, que las solidaridades y alianzas, aunque no del todo estables, producían un empate a 30 votos en la mayor parte de los artículos, lo que conducirá a pactos políticos difíciles en los temas más debatidos. Al mismo tiempo diversas fuerzas sociales se pronunciaron sobre algunos aspectos de la nueva constitución. La conferencia episcopal, por ejemplo, hizo público su descontento porque no se tomaron en cuenta sus consideraciones, especialmente sobre el respeto a la vida de los no-nacidos, la atención a los más necesitados, etc. Mons. Aparicio se lanzó más duramente contra la actitud de no reconocer el nombre de Dios cuando se lo utiliza constantemente por las máximas instancias públicas para sus intereses políticos. Por su parte, la ASI se pronunció en contra de unas relaciones obrero-patronales justas que perjudican los intereses económicos de la empresa y aumentan el desempleo. La ANEP reeligió a su directiva y se propuso como objetivos, además de la reactivación económica, el apoyo a las elecciones y a la política de Reagan,

la oposición a reformas profundas y la defensa del sistema democrático. La UPD fue la que más pronunciamientos emitió, en apoyo al diálogo y contra los abusos de la F.A., a favor de las reformas y de unas relaciones sociales justas en la empresa y en la vida nacional.

Por lo que respecta a las elecciones, se multiplicaron los pronunciamientos de diferentes líderes políticos e instituciones, así como de los miembros del CCE. Pero lo que llamó más la atención fue la postura adoptada en la asamblea respecto a la ayuda aprobada por los EE.UU. por un monto de 3.4 millones de dólares para viabilizarlas. El acuerdo entre ambos gobiernos no fue ratificado por la asamblea, por juzgarlo lesivo a la soberanía nacional en vista a las condiciones impuestas por el congresista Clarence Long en cuanto a la apertura a todas las corrientes ideológicas. La garantía física a todos los participantes y la garantía de que no se haría fraude. Sin embargo, días más tarde fue ratificado el acuerdo, como era de esperar.

La crisis económica se procuró paliar coyunturalmente por medio de la ayuda norteamericana en alimentos para desplazados y para el público en general, así como en medicinas de parte de entidades privadas de los EE.UU. Por otro lado, la aguda escasez y carestía de granos básicos, especialmente del maíz, hizo explotar un problema al parecer de tiempo atrás: la corrupción enquistada en el IRA y la proliferación de los 'acaparadores'. El escándalo llevó a algunas destituciones y renovación del personal, así como a la captura de algunos pequeños acaparadores —uno de ellos hermano de un coronel— a quienes más tarde se dejó en libertad por no ser los verdaderos responsables de la crisis ni haber actuado de mala fe; con lo que el problema no se llegó a dilucidar por el momento. En fin, diversas organizaciones laborales denunciaron despidos masivos de trabajadores de instituciones públicas y privadas (MAG, Correos, CLES) y la amenaza de otros despidos más.

Por lo que se refiere a la guerra, la otra cara de la tragedia nacional, en el mes de agosto el FMLN tuvo un ligero incremento de las acciones: 123 (24 en los departamentos de Cuscatlán y San Vicente, 16 en el de San Miguel, 14 en el de San Salvador y 10 en el de Morazán), con 14 tomas y 105 acciones estrictamente militares, en las que hay que incluir 70 capturas de elementos armados y 7 acciones de ajusticiamiento. Este ac-

cionar produjo 100 muertos a la F.A. (2 capitanes, 3 subtenientes, 6 pilotos, 1 sargento, 2 sub-sargentos, 3 cabos y 83 soldados), a los que si se agregan los grupos paramilitares da un listado de 118 muertos, 107 heridos y 214 bajas, para un total en el mes de 439 "bajas"; junto con la requisita de 91 armas largas (37 en San Miguel, 31 en Usulután, 18 en Chalatenango y 5 en Cuscatlán), a las que hay que agregar, además de abundantes municiones, otras armas cortas y de apoyo.

La F.A. no realizó en el mes ningún gran operativo de que se tenga conocimiento. Hizo varios medianos: en los 15 primeros días del mes uno en Chalatenango por el control de la carretera Troncal del Norte, en el que el FMLN dijo haberle aniquilado una compañía; otro a mediados del mes en el volcán de San Salvador y otro a finales en Cuscatlán, sin conocerse resultados de ninguno de los dos; dos pequeños, uno en San Vicente, sin saberse los resultados, y otro en Cabañas, a finales del mes, en el que la F.A. dijo haber causado la muerte de 27 miembros del FMLN en combate. En sendos cateos en San Salvador y Santa Ana cayeron una célula del ERP, una casa de seguridad del FMLN y una célula de las FAL con 5 de sus miembros.

El nuevo proyecto estratégico de la F.A., iniciando en San Vicente y enmarcado en el plan CONARA, parece estar sometido a prueba durante el mes, ya sea por la escasez de recursos económicos, ya sea por la falta de respuesta en la población que se resiste a retornar a la zona e iniciar el trabajo, ya sea por los hostigamientos a que se ha visto sometido por el FMLN. De nuevo, el ejército ha tenido que montar operativos en el volcán Chinchontepec, en el valle del Jiboa y en los cerros de San Pedro para desalojar a la guerrilla supuestamente barrida de la zona, pero que hizo una serie de emboscadas, volvió a destruir el puente "El Burro", ha controlado tramos de las carreteras, cercó la población de El Triunfo, sostuvo combates cerca de Tecoluca y en las faldas del volcán. En otros departamentos también se incrementaron las acciones del FMLN: en Usulután, además del ataque a El Triunfo (ya aludido), se tomó unas horas la población de Jucuapa, hizo una fuerte emboscada cerca de Jiquilisco, con bastantes bajas del ejército; en Cuscatlán el FMLN hizo numerosas bajas y prisioneros al ejército; en la zona de Cinquera, Suchitoto, Guazapa y Tejutepeque, bombardeó con morteros la posición de la F.A. en el volcán de Guazapa y destruyó dos camiones mili-

tares cargados de tropa en la carretera San Martín-Suchitoto, en Oratorio de Concepción sostuvo un mitin al tiempo que hostigaba a la guarnición de San Pedro Perulapán; en Chalatenango dispersó una compañía del ejército en la zona de "El Volcancillo"; en Morazán se tomó las poblaciones de Cacaopera y Sociedad, ambas al sur del río Torola; en Apopa y volcán de San Salvador, así como en Santa Ana, diversas emboscadas causaron numerosas bajas a la F.A.

El día 15 de agosto terminó el plazo de la amnistía, prorrogada por un mes. De acuerdo a los datos oficiales, 551 presos políticos fueron puestos en libertad, de los que sólo 133 pidieron salvoconductos y protección para quedarse en el país, otros se fueron por su cuenta al exterior y 170 se ampararon a ofertas de asilo y trabajo brindadas por los gobiernos de Canadá, Australia y Bélgica; de los "alzados en armas", 530 obtuvieron la amnistía —si bien muchos de ellos, de acuerdo a testimonios fidedignos, más que alzados en armas eran personas que buscaban ese recurso de seguridad, y otros muchos habrían sido llevados por la fuerza al lugar de trámites para aumentar el número de amnistiados. Como contrapunto, durante el mes de agosto la cifra de civiles muertos por la violencia se elevó a 323, (116 a manos de escuadrones paramilitares no identificados, 200 a manos del ejército, 2 a manos de la defensa civil y 5 a manos de organizaciones guerrilleras); también fueron capturadas 85 personas por los grupos militares y de derecha, de las que sólo 33 fueron reconocidas en cárceles o cuerpos de seguridad y el resto fue dado por "desaparecido", contra 4 secuestros (2 jornaleros y 2 agentes de cuerpos de seguridad) realizados por la guerrilla.

El mes de agosto, pues, si bien es cierto que abre una rendija a la esperanza en posibles diálogos y negociaciones, pero por otro lado se muestra la lentitud y dificultad para una solución política interna, a través de la Constitución y las elecciones, pero sobre todo se condensan nubarrones de la tormenta bélica en Centroamérica y en El Salvador.

Eugenio C. Anaya., h.